

Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes Contra Periodistas

Luis Carlos Díaz

Periodista y ciberactivista venezolano. Fue declarado por Amnistía Internacional como [prisionero de conciencia](#).

En marzo de 2019, Venezuela sufrió un apagón nacional durante casi una semana. Todo el sistema eléctrico, que en Venezuela es administrado por el Estado, colapsó y los venezolanos se quedaron [a oscuras por el blackout](#) desde el jueves 7 de marzo hasta la semana siguiente.

De ese apagón, el gobierno venezolano quiso culparme a mí. Para hacerlo fui detenido arbitrariamente a la salida de mi trabajo en el principal circuito privado de radio en el país: Unión Radio. Iba en bicicleta a mi casa y dos camionetas sin identificación y 16 hombres armados me chocaron en la vía, me detuvieron y se identificaron como el "Servicio Bolivariano de Inteligencia" (SEBIN). Me encapucharon y me llevaron a un centro clandestino de tortura donde me tuvieron unas 8 horas. La [Fact Finding Mission de la ONU](#) ha demostrado que en Venezuela hay centros de tortura clandestinos y que cuerpos de seguridad como el SEBIN y la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) son organismos que cometen crímenes de lesa humanidad como detenciones, desapariciones forzadas y torturas. Soy una víctima como muchas más en Venezuela.

Los agentes utilizaron métodos violentos para obligarme a grabar un video en el que me autoincriminara en un falso sabotaje eléctrico. Me mantuvieron encapuchado durante toda la sesión de tortura e interrogatorio. También me quitaron mi teléfono, mi computadora y todas mis pertenencias.

El gobierno chavista, con la acción de sus agentes, no solo violó mis derechos ese día, sino que además utilizaron medios de comunicación del Estado para atacarme y criminalizarme, allanaron mi casa de forma ilegal, en el allanamiento nos robaron a mi esposa y a mí todos nuestros equipos electrónicos y respaldos. Mi esposa, la escritora Naky Soto, era paciente de cáncer y estaba en su último ciclo de quimioterapia. Los agentes de seguridad también nos robaron todo nuestro dinero, que era necesario para su segunda operación y el resto del tratamiento médico. Esa información médica se la dijimos tanto a ellos como a los jueces en el tribunal, pero nada los frenó. Nos robaron todo y cuatro años después el tribunal y la fiscalía no han devuelto ni siquiera la bicicleta.

Fui encerrado en una cárcel de presos políticos, un centro de tortura conocido como El Helicoide. Esperamos verlo cerrado algún día o convertido en museo de los horrores de la revolución bolivariana.

Mucha gente salió en mi ayuda. Gracias a la presión de organizaciones no gubernamentales, defensores de derechos humanos, embajadas de países democráticos, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, el Parlamento Europeo (porque soy español), la iglesia venezolana, muchos políticos, mis colegas periodistas, medios de comunicación dentro y fuera de

Venezuela, mis alumnos, amigos y centenares de personas que salieron a protestar o a convertir la campaña #LiberenALuisCarlos en tendencia en Twitter en 12 países distintos, todo junto ayudó a que me excarcelaran del Helicoide, pero no quedé libre.

Un tribunal me mantuvo 3 años en Venezuela bloqueado mis posibilidades de viajar, trabajar libremente, hablar de mi caso. Amenazaron tanto a mi familia como a mis abogados con encarcelarlos a todos si hablaban de lo que sufrí en la detención, y además me obligaron a presentarme cada semana ante el tribunal.

Los torturadores nunca han sido investigados y el caso se mantiene en total impunidad. El Estado le ha garantizado impunidad a su aparato represivo, aunque mi caso haya sido denunciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización Mundial Contra la Tortura, Amnistía Internacional y la Fact Finding Mission de la ONU. Los responsables nunca se han retractado por hacer acusaciones falsas en mi contra, y más bien las han repetido en sus medios de comunicación.

El tribunal supuestamente me investigó por 3 años, pero nunca consiguió ninguna prueba para acusarme de nada. La falsa investigación me mantuvo encerrado en el país con todas mis libertades restringidas, sin dejarme trabajar y obligándome a perder contratos de trabajo, viajes, invitaciones académicas, diplomáticas y hasta emergencias familiares. Pusieron en riesgo nuestro sustento económico, la vida de mi esposa y me causaron daños de salud. No he obtenido justicia ni reparación.

Durante más de 3 años no pude hacer radio, algo que amo, y tampoco pude viajar. Tuve que trabajar en cosas tan distintas como conductor, presentador de shows en bares y teatros improvisados, generador de contenidos para otras personas, e incluso estuve en una agencia de publicidad. También pude conseguir trabajos a distancia y aproveché los contactos que tenía para fortalecer aún más mi perfil como consultor de estrategias de comunicación para organizaciones de derechos humanos. Eso lo he hecho muchos años de mi vida, pero ahora lo hago también con la perspectiva que tenemos las víctimas de graves violaciones de derechos humanos. Por fortuna, nunca han faltado amigos.

Lo más importante en mi proceso fue el apoyo jurídico de una ONG venezolana llamada Espacio Público. Sus abogados, expertos en libertad de expresión, han llevado adelante mi caso y me han proporcionado ayuda. Gracias a Front Line Defenders, pudimos reponer algunos equipos para seguir trabajando. También la organización Cofavic me ha brindado apoyo psicológico. Al mismo tiempo, cada víctima intenta reconstruir su propia identidad. Eso lo he logrado volviendo a ocupar mis roles en comunicación tanto en organizaciones sociales como en medios de comunicación. El año pasado pude volver al aire en la radio y me he divertido mucho, aunque haya mucha censura y amenazas del Estado. En Venezuela se censuran informaciones y fuentes que no pueden ser entrevistadas, como algunos políticos opositores y exiliados. También se bloquean páginas web y se generan oleadas de desinformación para que la gente pierda la confianza en los medios, las redes y en todo. Sin embargo la prensa venezolana, en su conjunto, sigue haciendo un trabajo independiente y riguroso que le ha permitido obtener reconocimientos internacionales. Aunque

dentro del país no se pueda imprimir un periódico con libertad, tanto la prensa como las ONG han sabido construirse espacios de incidencia pública para documentar y denunciar lo que sigue ocurriendo en Venezuela.

La ayuda de la comunidad internacional es importante porque puede exigir el cumplimiento de estándares de derechos humanos en la región. Puede presionar para que se busque una solución a la crisis migratoria, humanitaria y la falta de estado de derecho que hay en Venezuela. Sin embargo, con la prensa, específicamente, hay que fortalecer a quienes aún reportan y divulgan lo que ocurre en el país, así que la ayuda puede ir desde la difusión de sus contenidos hasta la formación y el financiamiento de equipos y tecnologías para seguir trabajando en un entorno precario y amenazado.

Los crímenes contra periodistas son lesiones contra toda la sociedad porque borran los límites y los contrapesos del poder, silencia lo que deberían saber todos y retrasa tanto los cambios sociales como la solución de las emergencias. Por eso, con menos impunidad es posible construir más paz.